



Asamblea General

Distr.
LIMITADA

A/AC.252/L.2*

11 de febrero de 1997

ESPAÑOL

ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ ESPECIAL ESTABLECIDO EN VIRTUD DE LA
RESOLUCIÓN 51/210 DE LA ASAMBLEA GENERAL,
DE 17 DE DICIEMBRE DE 1996
Primer período de sesiones
24 de febrero a 7 de marzo de 1997

Documento de trabajo preliminar presentado por Francia en
nombre de los siete principales países industrializados y
de la Federación de Rusia

Convenio Internacional para la represión de los atentados
terroristas cometidos con bombas

La Asamblea General,

Considerando que el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional contribuyen al cumplimiento de los propósitos y principios establecidos en los Artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas,

Consciente de la necesidad de que se concierte, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, un convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas,

Recordando su resolución 49/60, de 9 de diciembre de 1994, en la que aprobó la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional,

Recordando también su resolución 51/210, de 17 de diciembre de 1996, en la que estableció el Comité Especial encargado de elaborar un convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas,

Habiendo examinado el proyecto de convenio preparado por el Comité Especial de conformidad con la resolución 51/210,

* Publicado nuevamente por razones técnicas.

Aprueba y declara abierto a la firma y la ratificación o la adhesión el Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, cuyo texto se adjunta.

Anexo

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ATENTADOS
TERRORISTAS COMETIDOS CON BOMBAS

Los Estados Partes en el presente Convenio,

Teniendo presente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y al fomento de las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados,

Profundamente preocupados por el hecho de que se estén intensificando en todo el mundo los atentados terroristas en todas sus formas,

Recordando la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, que figura en el anexo de la resolución 49/60 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1994, en la que, entre otras cosas, "los Estados Miembros de las Naciones Unidas reafirman solemnemente y condenan en términos inequívocos todos los actos, métodos y prácticas terroristas por considerarlos criminales e injustificables, dondequiera y quienquiera los cometa, incluidos los que ponen en peligro las relaciones de amistad entre los Estados y los pueblos y amenazan la integridad territorial y la seguridad de los Estados",

Recordando también que en la Declaración se alienta además a los Estados "a que examinen con urgencia el alcance de las disposiciones jurídicas internacionales vigentes sobre prevención, represión y eliminación del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, a fin de asegurar la existencia de un marco jurídico global que abarque todos los aspectos de la cuestión",

Observando que los atentados terroristas con bombas, explosivos u otros artefactos incendiarios o mortíferos se están generalizando cada vez más,

Observando asimismo que las disposiciones jurídicas multilaterales vigentes no sirven para hacer frente debidamente a esos atentados,

Convencidos de la necesidad urgente de que se intensifique la cooperación internacional entre los Estados con miras a establecer y adoptar medidas eficaces y prácticas a los efectos de que se impidan esos atentados terroristas y se procese y castigue a sus autores,

Considerando que la comisión de esos atentados es motivo de grave preocupación para toda la comunidad internacional,

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1

A los efectos del presente Convenio:

1. Por "Instalación del Estado" se entiende toda instalación o vehículo permanente o provisional, cualquiera que sea su ubicación, utilizado u ocupado

/...

por empleados civiles o militares de una entidad estatal o administrativa a los efectos del desempeño de las obligaciones oficiales de esos empleados, siempre que la entidad en cuestión tenga dicha instalación en propiedad, arrendamiento o posesión o la utilice por otro concepto.

2. Por "Instalación de infraestructura" se entiende toda instalación de propiedad pública o privada que se utilice para prestar o distribuir servicios al público, incluidos los de suministro de agua, alcantarillado, energía, combustible o comunicaciones.

3. Por "Artefacto mortífero" se entiende toda arma o artefacto que obedezca al propósito de causar o pueda causar la muerte o graves lesiones corporales mediante la emisión, la propagación o el impacto de:

- a) Productos químicos tóxicos;
- b) Agentes o toxinas de carácter biológico;
- c) Radiaciones o material radiactivo.

4. Por "Fuerzas militares estructuradas de un Estado" se entienden las fuerzas armadas de un Estado que estén estructuradas, entrenadas y equipadas primordialmente a los efectos de la legítima defensa de la nación, así como las personas que están autorizadas a sumarse a dichas fuerzas armadas.

5. Por "Lugar de uso público general" se entiende todo edificio, terreno, vía pública, curso de agua u otro emplazamiento que sea accesible o esté abierto total o parcialmente al público de manera permanente, periódica u ocasional, lo que abarca todo lugar de carácter comercial, empresarial, cultural, histórico, educativo, religioso, estatal, artístico, recreativo o de otra índole que sea accesible o esté abierto al público.

6. Por "Red de transporte público" se entienden todas las instalaciones, vehículos e instrumentos de propiedad pública o privada que se utilicen para el transporte de personas o mercancías por tierra, mar o aire.

Artículo 2

1. Comete delito en el sentido del presente Convenio la persona que ilícita e intencionadamente entrega, coloca, arroja o hace estallar una bomba, un artefacto explosivo o incendiario o un artefacto mortífero bien en un lugar de uso público general, una instalación del Estado, una red de transporte público o una instalación de infraestructura, bien en otro sitio desde el que se produzcan efectos en ese lugar:

- a) Con el propósito de matar o de causar graves lesiones corporales; o
- b) En circunstancias que indiquen que esa persona sabía o debía haber sabido que su conducta entrañaría un riesgo sustancial de muerte o de graves lesiones corporales.

2. También comete delito toda persona que intente cometer cualquiera de los delitos previstos en el párrafo 1.

3. A reserva de los principios constitucionales y de los conceptos básicos de los ordenamientos jurídicos de los Estados Partes, comete asimismo delito la persona que realiza actos constitutivos de participación, asociación o conspiración a los efectos de cometer uno de los delitos previstos en el párrafo 1, de ayudar o inducir a la comisión de ese delito, de facilitar su comisión o de prestar asesoramiento con ese fin¹.

Artículo 3

1. El presente Convenio no tendrá aplicación cuando las fuerzas militares estructuradas de un Estado entreguen, coloquen, arrojen o hagan explotar una bomba, un artefacto explosivo o incendiario o un artefacto mortífero.

2. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio podrá interpretarse en el sentido de que exonera de otras obligaciones impuestas a los Estados por el derecho internacional humanitario.

Artículo 4²

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para:

a) Considerar delitos, con arreglo a su legislación interna, los delitos previstos en el artículo 2;

b) Establecer para esos delitos penas adecuadas en las que se tenga en cuenta la naturaleza grave de dichos delitos.

Artículo 5³

1. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos previstos en el artículo 2 cuando el delito sea cometido:

a) En el territorio de ese Estado;

¹ Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, 1988, artículo 3.1 c) iv).

² Convención internacional contra la toma de rehenes, 1979, artículo 2; Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, 1988, artículo 5.

³ Adaptación de la Convención internacional contra la toma de rehenes, artículo 5; Convenio de la OMI para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, artículo 6.

b) A bordo de un buque o de una aeronave que, en el momento de la comisión del delito, enarbole el pabellón de ese Estado o esté legalmente matriculada en ese Estado, respectivamente; o

c) Por un nacional de dicho Estado.

2. Un Estado Parte podrá también establecer su jurisdicción respecto de cualquiera de tales delitos cuando:

a) Sea cometido contra un nacional de ese Estado;

b) Sea cometido por un apátrida que resida habitualmente en el territorio de ese Estado; o

c) Sea cometido con el propósito bien de intimidar o coaccionar a la población civil de ese Estado o de ejercer represalias contra ella, bien de obligar a ese Estado a realizar o abstenerse de realizar un determinado acto.

3. Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2, en los casos en que el presunto delincuente se halle en su territorio y dicho Estado no conceda la extradición a ninguno de los Estados Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 ó 2 del presente artículo⁴.

4. El presente Convenio no excluye el ejercicio de ninguna jurisdicción penal establecida por un Estado Parte de conformidad con su legislación interna⁵.

Artículo 6

1. Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el delincuente o el presunto delincuente, si estima que las circunstancias lo justifican, procederá, de conformidad con su legislación, a la detención de esa persona o tomará otras medidas para asegurar su presencia durante el tiempo que sea necesario a fin de permitir la tramitación de un procedimiento penal o de extradición⁶.

⁴ Convención internacional contra la toma de rehenes, artículo 6 (4); Convenio de la OMI para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, artículo 5 (2).

⁵ Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, artículo 4.3

⁶ Convención internacional contra la toma de rehenes, artículo 6 (1); Convenio de la OMI para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, artículo 7 (1).

2. Dicho Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar, con arreglo a su legislación⁷.

3. Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas mencionadas en el párrafo 1 tendrá derecho a:

a) Ponerse sin demora en comunicación con el representante pertinente más próximo del Estado del que sea nacional o al que competa por otras razones establecer dicha comunicación o, si se trata de un apátrida, del Estado en cuyo territorio resida habitualmente;

b) Ser visitada por un representante de dicho Estado⁸.

4. Los derechos a que se hace referencia en el párrafo 3 se ejercitarán de conformidad con las leyes y los reglamentos del Estado en cuyo territorio se halle el delincuente o presunto delincuente, a condición de que esas leyes y esos reglamentos permitan que se cumpla plenamente el propósito de los derechos indicados en el párrafo 3⁹.

5. Lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho de todo Estado Parte, que, con arreglo al inciso c) del párrafo 1 del artículo 5 pueda hacer valer su jurisdicción, a invitar al Comité Internacional de la Cruz Roja a ponerse en comunicación con el presunto delincuente y visitarlo¹⁰.

6. El Estado Parte que, en virtud del presente artículo, detenga a una persona, notificará inmediatamente tal detención y las circunstancias que la justifiquen a los Estados que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con el párrafo 1 del artículo 5 y, si lo considera conveniente, a todos los demás Estados interesados. El Estado que proceda a la investigación preliminar prevista en el párrafo 2 del presente artículo comunicará sin dilación los resultados de ésta a los Estados mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción¹¹.

⁷ Convención internacional contra la toma de rehenes, artículo 6 (1); Convenio de la OMI para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, artículo 7 (2).

⁸ Convención internacional contra la toma de rehenes, artículo 6 (3); Convenio de la OMI para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, artículo 7 (3).

⁹ Convención internacional contra la toma de rehenes, artículo 6 (4); Convenio de la OMI para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, artículo 7 (4).

¹⁰ Convención internacional contra la toma de rehenes, artículo 6 (5).

¹¹ Convenio de la OMI para la represión de los actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, artículo 7 (6).

Artículo 7¹²

1. El Estado Parte en cuyo territorio sea hallado el delincuente o presunto delincuente, si no procede a la extradición del mismo, estará obligado a someter sin dilación el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio, según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier otro delito de naturaleza grave de acuerdo con el derecho de tal Estado.

2. Si la legislación de un Estado Parte le permite proceder a la extradición de uno de sus nacionales o entregarlo de otro modo sólo a condición de que sea devuelto a dicho Estado para cumplir cualquier condena que le sea impuesta a resultas del juicio o procedimiento para el cual se pidió su extradición o su entrega, y el Estado que solicita la extradición de esa persona acepta tal condición, dicha extradición o entrega condicional será suficiente para dejar sin efecto la obligación enunciada en el párrafo 1.

3. Toda persona encausada en relación con cualquiera de los delitos previstos en el artículo 2 gozará de las garantías de un trato equitativo en todas las fases del procedimiento, incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos en la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre.

Artículo 8

1. Los delitos previstos en el artículo 2 se considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí¹³.

2. Si un Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado recibe de otro Estado Parte, con el que no tiene tratado, una solicitud de extradición, podrá, a su elección, considerar el presente Convenio como la base jurídica necesaria para la extradición con respecto a los delitos previstos en el artículo 2. La extradición estará sujeta a las demás condiciones exigidas por la legislación del Estado al que se ha hecho la solicitud¹⁴.

¹² Convención internacional contra la toma de rehenes, artículo 8; Convenio de la OMI para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, artículo 10 (el párrafo 2 del artículo 7 es una propuesta nueva).

¹³ Convención internacional contra la toma de rehenes, artículo 10 (1); Convenio de la OMI para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, artículo 11 (1).

¹⁴ Convención internacional contra la toma de rehenes, artículo 10 (2); Convenio de la OMI para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, artículo 11 (2).

3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos previstos en el artículo 2 como casos de extradición entre ellos, con sujeción a las condiciones exigidas por la legislación del Estado al que se haga la solicitud¹⁵.

4. A los fines de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los delitos previstos en el artículo 2 se han cometido no sólo en el lugar en que fueron perpetrados sino también en el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción de conformidad con el párrafo 1 del artículo 5¹⁶.

5. Con respecto a los delitos definidos en el presente Convenio, las disposiciones de todos los tratados y acuerdos de extradición aplicables entre Estados Partes quedan modificadas en lo que afecte a los Estados Partes en la medida en que sea incompatible con el presente Convenio¹⁷.

Artículo 9

1. Los Estados Partes se prestarán la mayor ayuda posible en relación con cualquier proceso penal incoado con respecto a los delitos previstos en el artículo 2, incluso el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder¹⁸.

2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud del párrafo 1 de conformidad con los tratados de asistencia judicial mutua que existan entre ellos. En ausencia de dichos tratados, los Estados Partes se prestarán dicha asistencia de conformidad con su legislación interna¹⁹.

Artículo 10

1. Toda persona que se encuentre en prisión en un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para fines de prestar testimonio o de identificación o para que ayude a obtener pruebas necesarias para la investigación o el enjuiciamiento de delitos previstos en el presente Convenio, será trasladada:

¹⁵ Convención internacional contra la toma de rehenes, artículo 10 (3); Convenio de la OMI para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, artículo 11 (3).

¹⁶ Convención internacional contra la toma de rehenes, artículo 10 (4).

¹⁷ Convención internacional contra la toma de rehenes, artículo 9 (2); Convenio de la OMI para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, artículo 11 (7).

¹⁸ Convención internacional contra la toma de rehenes, artículo 11 (1); Convenio de la OMI para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, artículo 12 (1).

¹⁹ Convenio de la OMI para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, artículo 12 (2).

- a) Si consiente en ello; y
- b) Si las autoridades competentes de ambos Estados están de acuerdo, con sujeción a las condiciones que dichos Estados puedan considerar apropiadas.

2. Para los fines del presente artículo:

- a) El Estado al que sea trasladada la persona estará autorizado y obligado a mantenerla en prisión, salvo que el Estado desde el que fue trasladada solicite o autorice otra cosa;
- b) El Estado al que sea trasladada la persona la volverá a poner a disposición del poder judicial del Estado desde el que fue trasladada en cuanto las circunstancias lo permitan o según convengan las autoridades competentes de ambos Estados;
- c) El Estado al que sea trasladada la persona no exigirá al Estado desde el que fue trasladada que inicie procedimientos de extradición para su regreso;
- d) A la persona trasladada se le tendrá en cuenta el tiempo que haya permanecido en prisión en el Estado al que fue trasladada a los efectos de cumplir la condena que le haya sido impuesta en el Estado desde el que fue trasladada.

Artículo 11²⁰

Los Estados Partes cooperarán en la prevención de los delitos previstos en el artículo 2, en particular:

- a) Adoptando todas las medidas apropiadas para impedir que se prepare en sus respectivos territorios la comisión de dichos delitos tanto dentro como fuera de ellos;
- b) Intercambiando información de conformidad con su legislación interna, y coordinando medidas administrativas y de otra índole adoptadas, según proceda, para impedir que se cometan los delitos previstos en el artículo 2.

Artículo 12²¹

El Estado Parte en el que se entable una acción penal contra el presunto delincuente comunicará, de conformidad con su legislación, el resultado final de esa acción al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá la información a los demás Estados Partes interesados. Este requisito no habrá de cumplirse en los casos en que ningún otro Estado Parte tenga jurisdicción con arreglo al artículo 5.

²⁰ Convenio de la OMI para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, artículo 13, (1).

²¹ Convención internacional contra la toma de rehenes, artículo 7.

Artículo 13²²

1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o aplicación del presente Convenio que no pueda resolverse mediante negociaciones dentro de un plazo razonable se someterá a arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.

2. Cada Estado, en el momento de la ratificación del presente Convenio o de su adhesión a él, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo respecto de ningún Estado Parte que haya formulado esa reserva.

3. Todo Estado que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 14²³

1. El presente Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados hasta el [fecha] en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

2. El presente Convenio está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3. El presente Convenio está abierto a la adhesión de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 15²⁴

1. El presente Convenio entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se deposite el vigésimo segundo instrumento de ratificación o adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. Para cada uno de los Estados que ratifiquen el Convenio o se adhieran a él después de que sea depositado el vigésimo segundo instrumento de ratificación o adhesión, el Convenio entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que dicho Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

²² Convención internacional contra la toma de rehenes, artículo 16; Convenio de la OMI para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, artículo 16.

²³ Convención internacional contra la toma de rehenes, artículo 17.

²⁴ Convención internacional contra la toma de rehenes, artículo 18.

Artículo 16²⁵

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Convenio mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
2. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas reciba la notificación.

Artículo 17²⁶

El original del presente Convenio cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que enviará copias certificadas de él a todos los Estados.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Convenio, abierto a la firma en Nueva York el [fecha].

²⁵ Convención internacional contra la toma de rehenes, artículo 19.

²⁶ Convención internacional contra la toma de rehenes, artículo 20.